

PLAZA PUBLICA

Embajada Mexicana Ocupada Un Mensaje de Salvadoreños Protesta Contra la Represión

Por MIGUEL ANGEL
GRANADOS CHAPA

Ayer martes, por la mañana, un grupo guerrillero de El Salvador invadió la embajada mexicana en la capital de aquel país, a cargo de Alberto Sales Hurtado. Impidió la salida de quienes allí se encontraban,

sin importar su nacionalidad, su estatuto jurídico y el motivo por el cual se hallaran allí, y se propone no dejarlos en libertad hasta que se resuelvan algunas de sus peticiones, sobre todo la liberación de un grupo de presos políticos. He allí la terrible paradoja del terrorismo y el antiterrorismo: para liberar algunos presos se apresó a otras personas.

A nadie puede alegrar el hecho, que viola el derecho internacional y pone en grave peligro muchas vidas humanas. Si bien no parece que el objetivo sea realmente conseguir la libertad de los presos políticos, sino más bien llamar la atención de los mexicanos sobre las condiciones imperantes en esa república centroamericana, y por consiguiente cabe esperar que la partida guerrillera salga de allí sin causar daño a nadie —inclusivo es posible que eso haya ocurrido entre el momento en que estas líneas se escriben y el instante en que estén frente al lector—, no deja de estar presente el riesgo de que un operativo policiaco o militar suscitara una violencia de la que no podrían escapar vidas inocentes.

Es condenable el secuestro de que han sido víctimas esas noventa personas en El Salvador. Pero aunque carezca de justificación, el hecho tiene explicaciones, que se vinculan con nuestro país. De allí que le traigamos de nuevo a nuestra "Plaza Pública". Ya el viernes de la semana pasada, en este mismo lugar, dimos cuenta de la legislación antiterrorista, terrorista ella misma, puesta en práctica con saña por el gobierno militar de esa nación centroamericana cuyo jefe, el general Carlos Humberto Romero, debe llegar a México mañana por la mañana, invitado por nuestro gobierno que, estimamos, no tomó en cuenta las terribles circunstancias políticas de esa república al formular o concretar la invitación a su gobernante. No es que proclamemos la necesidad de que México sólo convide a nuestro suelo a gobernantes impolutos, porque no existen. Ni tampoco juzgamos, por contra, que ni el Presidente de Francia ni el de Estados Unidos vendrán en las próximas semanas y no hay impugnación alguna a su viaje ello significa que carezcan de cadáveres en sus armarios.

No: lo que queremos subrayar es que choca con las mejores tradiciones diplomáticas de México el que sea nuestro huésped un gobernante tan abierta y sostenidamente combatido por sus gobernados. Lo que allí se dirime es asunto estrictamente de los salvadoreños, y mal haríamos en querer calificar, invitando o dejando de invitarlo, a quien encabeza a un régimen. Pero tampoco hay derecho a que se utilice este viaje para mejorar la imagen de un militar que, llegado al gobierno en medio de acusaciones de fraude electoral, se comporta como sus congéneres que arribaron al poder mediante cuartelazos. Después de todo, también Somoza ha sido elegido. Mal haríamos en permitir que aparezcamos como cómplices de la matanza sistemática que sobre todo en el campo salvadoreño ha emprendido el gobierno de aquel país, y que ha sido objeto de la atención preocupada de otros gobiernos y sociedades democráticas.

Por ejemplo, tenemos a la mano un "análisis de los primeros nueve meses del régimen del Presidente Romero" que con el título "El Salvador bajo el general Romero" publicó en Londres el Latin American Bureau. Este organismo fue, conforme a la nota que aparece en el estudio al que nos referimos, "creado en marzo de 1977 con la ayuda de agencias de desarrollo y organizaciones vinculadas con la Iglesia (no sabemos si se trata de la anglicana o

de la católica). A través de la investigación, la documentación y la publicidad, tiene por objeto elevar el nivel de conciencia pública sobre la situación social, económica, política y de los derechos humanos en América Latina; promover la participación de la Iglesia, sindicatos, gobiernos y otros en actividades relacionadas con esos problemas y facilitar apoyo a aquellos que en América Latina que luchan en contra de la injusticia social y la explotación de sus pueblos".

No decimos que las afirmaciones contenidas en este análisis sean el Evangelio y que haya que tomarlas al pie de la letra. Cotejadas con informaciones procedentes de otras fuentes, sin embargo, contribuyen a tener una idea de lo que ocurre actualmente en la nación centroamericana. Exclusivamente en esas condiciones las referimos aquí.

Pero no contemos los macabros detalles de la represión encabezada por el Presidente Romero en estos días. Citemos sólo la influencia que el general ha tenido sobre los gobiernos que lo antecedieron, y con los cuales se inicia el gran proceso de ataque a los grupos populares:

"El 10. de julio de 1977 no toma posesión de la Presidencia de la República un gobierno ubicado en la oposición respecto del gobierno anterior. Ni siquiera se trata del ascenso al poder de alguien del mismo partido o de las mismas fuerzas armadas que no ha participado directamente en las responsabilidades de los gobiernos anteriores. Ya con el gobierno pectenista (del Partido de Conciliación Nacional, PCN) del general Sánchez Hernández (1967-72), el entonces coronel Romero desempeñó el cargo de jefe de la plana mayor presidencial; pero sobre todo durante el gobierno del coronel Molina (1972-77) el general Romero fungió como ministro de la Defensa, teniendo bajo su dirección inmediata tanto a las fuerzas armadas como a los diferentes cuerpos de seguridad del país...

"Si el general Romero —razona el análisis con lógica contundente— no fue corresponsable de apoyar en un acto de dudosa lealtad (constitucionalmente la lealtad de las fuerzas armadas pertenece al pueblo) una elección presidencial como la del coronel Molina, a la que todos los indicios señalan como fraudulenta; si no fue corresponsable de que jamás se publicaran las cifras de las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1974; si nada tuvo que ver con las atrocidades cometidas por los cuerpos de seguridad durante la tristemente famosa jornada de la Cayetana (29 noviembre 74) ni tampoco fue corresponsable de los asesinatos perpetrados en Tres Calles (21 junio 1975) ni tuvo nada que ver en la sangrienta represión de la manifestación pacífica de los universitarios el 30 de junio o del 1975 represión desatada por la excelente organización de las fuerzas del estado que en ella intervinieron, no cabe duda de que podría haberlo demostrado ejercitando la influencia de su alto cargo para promover otras tantas investigaciones exhaustivas que satisficieran la justa indignación de muchos salvadoreños".

No tenemos espacio, hoy, para recontar los actos de violencia represiva que durante su gobierno ha ejecutado nuestro visitante de mañana. En previsión de que se arguyan en su favor acciones positivas bajo su mandato, se nos ocurre recordar los versos del precozmente muerto poeta salvadoreño Roque Dalton, a propósito de otro dictador de su país, el general Maximiliano Hernández Martínez: "Dicen que fue un buen Presidente —porque repartió casas baratas— a los que quedaron..."